



# EL DERECHO A LA INFORMACION PÚBLICA JUDICIAL -UNA INTRODUCCIÓN A SU ESTUDIO-

JORGE LUIS BASTONS  
*UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA*

## INTRODUCCIÓN

**P**uestos a repensar las implicancias del acceso a la información pública<sup>1</sup> y en particular del acceso a la información pública judicial en nuestro país, fijamos como piedra basal de este estudio a la vuelta a la democracia en 1983.

Y no la situamos allí por mero capricho, sino por obvias razones de andamiaje y viabilidad del libre flujo de información pública y privada que dicho régimen presupone. Máxime aún, si recordamos que el gobierno de la dictadura llevó adelante sendos proyectos de acción psicológica en pos del control ideológico de la población, a partir de un férreo control directo y/o indirecto de los medios de comunicación masiva. Resultando por aquellos años moneda corriente los cierres de diarios y revistas, la persecución y silenciamiento de periodistas, la imposición de la censura previa, así como la intervención de radios y canales de televisión, entre otras.

Dado que las sociedades no dejan de ser totalitarias de la noche a la maña-

---

<sup>1</sup> Para su estudio en extenso puede verse El derecho de acceso a la información pública. Derecho humano y herramienta fundamental para la realización de un control democrático de la actividad administrativa. Jorge Luis BASTONS – Analía ELIADES. Pp.95/125 de la obra colectiva Derecho Público para Administrativistas, Jorge Luis BASTONS (Director). Librería Editora Platense (LEP). Enero de 2008. Buenos Aires.

na, o mejor dicho, que no hay sociedad que resulte inmune a diez años de vida bajo criterios y patrones de conducta enmarcados por aquél sistema de dominación, el tránsito de los usos y costumbres públicos y privados de la dictadura a la democracia resultó indudablemente dificultoso, tal como lo prueban en los gobiernos de Alfonsín y Menem toda una serie de atentados contra las instituciones públicas que nos recordaban la fragilidad de nuestra joven democracia.

Ergo, puestos a fortalecerla, es nuestro deber y salvación conocer y controlar los actos y omisiones en que incurren todos y cada uno de los órganos del Estado, para lo cual la ciudadanía habrá de ejercer necesariamente su derecho al acceso a la información pública. Ello, puesto que *el derecho de acceso a la información pública, veraz y oportuna constituye uno de los pilares trascendentales del funcionamiento de la democracia, ya que ésta mal podría reputarse tal, si no expresara la plena vigencia del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno. Por lo tanto, es preciso destacar que el derecho de acceso a la información pública no es ningún invento esotérico, ni responde a moda alguna, sino que integra e implica la existencia del Derecho a la Información, el cual comprende tanto la facultad de dar, de buscar, como de recibir información.*

Siendo el derecho a la información indivisible de los demás derechos, se trata entonces de un derecho necesario para el ejercicio y la protección de todos ellos ya que, sin libertad de expresión y sin posibilidades de acceder a la información pública, resulta imposible ejercer civismo alguno.

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos (usualmente denominada “Pacto de San José de Costa Rica”) consagra en su Artículo 13 el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, el cual naturalmente incluye el derecho de acceso a la información pública<sup>2</sup>. Y decimos que incluye *el derecho al acceso a la información pública* porque estamos frente a un *derecho a la acción*.

---

<sup>2</sup> Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión: 1. “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Por su parte la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos al aprobar en el año 2000 la Declaración sobre Libertad de Expresión, dejó asentado en su Principio 4 que: *“El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”*.

### **1. ASPECTO NORMATIVO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO CONSTITUCIONAL ARGENTINO**

La Constitución Argentina (1853-1860) ya consagraba la libertad de imprenta en sus Artículos 14 y 32. Con la reforma constitucional de 1994, se le otorgó jerarquía constitucional a diez Tratados de Derechos Humanos por intermedio de su Artículo 75 inciso 22, incorporándose entre otros el llamado *Pacto de San José de Costa Rica*, el cual consagra como ya dijimos el derecho a dar, recibir y difundir información (conf. Art.13).

Asimismo, entre los “Nuevos derechos y garantías” que establece la Constitución reformada en 1994, se estableció en su Artículo 41 el derecho a ser provisto de información ambiental por las autoridades públicas.

En el orden normativo específico, a nivel nacional se ha dictado el Decreto 1172/03 (B.O.: 4/12/2003) por el cual se aprueban los Reglamentos Generales de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, para la Publicidad de la Gestión de Intereses en dicho ámbito. Asimismo se establecen las pautas para la elaboración participativa de normas, el acceso a la información pública y las reuniones abiertas de los entes reguladores de los servicios públicos.

Por su parte, la Ley 25.831 ha establecido el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental (B.O.: 07/01/2004), norma que ha marcado un importante logro en la materia. La ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encuentre en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional, provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas,

privadas o mixtas.

A su vez, el denominado “Estatuto del Periodista Profesional”, Ley 12908 establece en su artículo 13 que *el periodista tiene derecho al “acceso libre a toda fuente de información de interés público”*.

Sin perjuicio de la legislación mencionada sobre el particular, corresponde resaltar que aún no contamos con una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, aunque sí existen diversas leyes provinciales de acceso a la información pública, tales los casos de Chubut, Córdoba, La Pampa, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

## **2. IMPORTANCIA DEL FALLO “CLAUDE REYES Y OTROS C/CHILE” (SENT. 19/09/06)**

Como sabemos al estar nuestro país suscripto al régimen de control jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en Costa Rica, sus fallos les son naturalmente aplicables, constituyendo por ende doctrina judicial obligatoria para todos los tribunales argentinos<sup>3</sup>.

Los hechos del caso: oportunamente el Sr. Claude Reyes le solicitó al Comité de Inversiones Extranjeras del Gobierno de Chile que les proveyera información de indudable carácter público referida a una inversión de la firma extranjera “Forestal Trillium Limitada” que ésta planeaba realizar sobre un bosque situado al sur de dicho país.

El Gobierno Chileno brindó información parcial, negándose a ampliar la misma en la inteligencia que no se encontraba legalmente obligado a ello y además porque entendía haber brindando ya información suficiente (después surgió de las testimoniales hechas en la Argentina que el funcionario chileno a cargo del ente público referido adujo que no se podía brindarles más informa-

---

<sup>3</sup> Así lo atestigua la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, por caso in re “Gioldi” (Sentencia del 07/04/95), se dijo: “Que la recordada “jerarquía constitucional” de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente “en las condiciones de su vigencia” (Art.75 Inc. 22, segundo párrafo), esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación”. Ver asimismo “Acosta: A.61 XXXIV” y “Bramajo: Fallos (319:1840). Sent. 12/09/96”.

ción ya que ello podría hacer peligrar la inversión de la firma). Pero lo cierto fue que nunca explicaron en que consistía ese proyecto de inversión. Por lo que agotada la vía judicial en suelo chileno, se elevó la pertinente petición de atención de la causa por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual la entendió pertinente y la elevó a su vez a la Corte IDH que, en lo sustancial, dijo lo siguiente:

“**Punto 77.** En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea.”

“**Punto 78.** Al respecto, es importante destacar que existe un consenso regional de los Estados que integran la Organización de los Estados Americanos (en adelante “la OEA”) sobre la importancia del acceso a la información pública y la necesidad de su protección. Dicho derecho ha sido objeto de resoluciones específicas emitidas por la Asamblea General de la OEA. En la última Resolución de 3 de junio de 2006 la Asamblea General de la OEA “inst[ó] a los Estados a que respeten y hagan respetar el acceso a la información pública a todas las personas y [a] promover la adopción de disposiciones legislativas o

de otro carácter que fueran necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva”.

Por lo tanto, con estos fundamentos, la Corte IDH resolvió por unanimidad que:

- El Estado chileno debía entregar la información solicitada en el plazo de seis meses, o en su caso adoptar una decisión fundamentada al respecto.
- El Estado debía publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional el capítulo relativo a los Hechos probados en la sentencia,
- El Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, de acuerdo al deber general de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el Art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El Estado debe realizar, en un plazo razonable, la capacitación a los órganos, autoridades y agentes públicos encargados de atender las solicitudes de acceso a información bajo el control del Estado sobre la normativa que rige este derecho, que incorpore los parámetros convencionales que deben respetarse en materia de restricciones al acceso a la información.
- Indemnización a los afectados. Pago de costas y gastos: 10.000 dólares.

### **3. ALGUNAS NOTAS DESTACABLES SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA JUDICIAL**

El acceso a la información pública judicial, efectiva y veraz, es ni más ni menos que un anhelo. Pero eso sí, un anhelo con visos de aplicabilidad, de concreción, de sueño razonable. Y lo es por la sencilla razón de que nuestro Poder Judicial, que si bien es muchas veces percibido por la población como un reservorio de usos y costumbres propias de un país que ya no es, a decir verdad no ha sido ajeno a los cambios ocurridos en el seno de nuestra sociedad civil, por lo que más allá del conservadurismo que lo caracteriza, ello no ha sido óbice para que se preocupara por mejorar su comunicación institucional interna y externa a los fines de posibilitar una mayor y mejor interacción con el medio en el cual se desenvuelve.

Desde luego, la finalidad, los objetivos, son los de siempre... vivir en un

Estado de Derecho. Lo cual presupone que los poderes que conforman el Estado no sólo se ajusten a derecho atendiendo al normal desarrollo de las funciones públicas que los caracterizan, sino que den cuenta de ello. Y dar cuenta de ello no es solamente dar a conocer los números que acrediten el ejercicio transparente de la gestión, sino informar, facilitar, propiciar y permitir que, cuando cualquier ciudadano/a con un interés simple guste de saber qué hacen o han dejado de hacer los diversos organismos y funcionarios públicos, cuenten con la posibilidad formal y material de satisfacer dicha inquietud mediante la provisión de la información requerida en un tiempo razonable.

Por supuesto, la problemática no empieza ni acaba aquí, aunque el principio, la idea del libre acceso a la información pública judicial, no deje de ser un tabú para quienes aún siguen creyendo que los jueces sólo hablan a través de sus sentencias. En síntesis, lo que estamos diciendo es que *el Principio es el del Libre Acceso a la Información Pública Judicial y, la excepción, su denegatoria*.

Desde luego, que duda cabe que sería absolutamente disfuncional e inmoral dar a conocer los nombres de menores de edad implicados en casos judiciales; así como develar la identidad o paradero de un testigo protegido; o no respetar el secreto de sumario en una causa penal; por sólo dar algunos ejemplos en los cuales se aprecia a simple vista la necesidad de proteger la información sensible referida.

Pero que quede claro, el Principio debe ser el de la Publicidad por la sencilla razón de que la población debe estar informada para que así pueda ejercer (individual o colectivamente) todos aquellos derechos basados en el conocimiento de la realidad circundante, para la mejor toma de decisiones públicas y privadas. Ya que, como decía el filósofo John Dewey, “la democracia es comunidad más comunicación”.

Ahora bien, más allá de estos lineamientos generales, hay toda una serie de cuestiones que se desenvuelven bajo ese paraguas, entre los que, por caso, encontramos las referidas a los alcances de la apertura informativa que debe sostener la institución judicial, y a contrario sensu, cómo estaría conformada la casuística vedada al conocimiento público. Sobre el particular entendemos que tales limitaciones deberían ser dadas por ley o bien por acordadas de la Corte

Nacional y de los Superiores Tribunales de Justicia provinciales.

Otro tema de relevancia es el referido al ejercicio del periodismo, el cual por mejor que se lo lleve a cabo, bajo ningún concepto podrá servirle a los poderes públicos de excusa para obstaculizar el libre acceso a la información pública por parte de la población. Vale decir que el ejercicio regular del periodismo, o la invocación y aún constatación de la existencia de una prensa libre no es (ni será) un argumento oponible a las solicitudes que los particulares pudieran hacer al respecto.

Por otra parte, en los últimos años han aparecido un buen número de *Vocerías Judiciales*, por las cuales se busca articular de manera organizada y razonable la comunicación institucional interna y externa. Es decir, principalmente entre los jueces que llevan aquellas causas de mayor interés periodístico y los representantes acreditados de los diversos medios de comunicación masiva.

Asimismo las vocerías van camino a ser también las encargadas de administrar la comunicación institucional directa entre los poderes judiciales y la población en general, por lo que debería propiciarse una mayor interacción entre las áreas vinculadas al diseño comunicacional, la imagen institucional y la administración de redes informáticas, entre otras. Como se notará, los aspectos informáticos y sus soportes técnicos requieren especial relevancia puesto que su buen o mal funcionamiento conllevan el eventual éxito o fracaso de una buena comunicación institucional en un mundo dónde el uso de tales herramientas definen este estadio de la civilización como *la sociedad de la información*.

Otra cuestión vinculada a los aspectos comunicacionales que giran en torno a la problemática del acceso a la información judicial es el referido a la cantidad y calidad de sentencias de los magistrados, así como al buen y mal uso que hacen del idioma.

Va de suyo que el tema es ríspido y en principio no demasiado pasible de ser tratado bajo criterios generales, mas no obstante lo dicho, nos limitamos a recordarle a los eventuales lectores que siendo los jueces empleados públicos les cabe la manda constitucional de *ser idóneos* en relación a las tareas que les toca entender. Por lo que habrá que ver si el ejercicio de esa idoneidad exige o no que las sentencias sean legibles y entendibles sólo para los letrados intervi-



nientes o bien para las partes y cualquier otro individuo que guste anoticiarse de ello sin necesidad de traducción alguna.

Entendemos que hay que conocer mucho el Derecho para en una sentencia poder exponer en palabras precisas y sencillas el sentido y alcance de los derechos y obligaciones de cada quien. Ergo, no nos parece que la calidad técnico-jurídica de un fallo deba resultar necesariamente opacada por el uso más difundido del lenguaje popular cotidiano en detrimento del específicamente jurídico.

En definitiva, si un Juez no puede escribir el derecho de manera clara y sencilla, entonces ese juez (así, con minúscula) quizá no debería ser Juez, puesto que ha olvidado que los naturales destinatarios de sus fallos no son otros que sus naturales mandantes.

En resumen, ha de quedarnos claro que la lucha contra las inmunidades del poder (tanto público como privado) se construye con el necesario aporte de la ciudadanía y, para que ella pueda participar de la responsable construcción cotidiana del mundo que la rodea ha de estar previa y debidamente informada, por lo que deviene una verdad ya de perogrullo que debe poder acceder libremente y sin arbitrarias cortapisas a la información pública. Obligación que ante su debido requerimiento, tampoco es ajeno el Poder Judicial.